LA VÍCTIMA U OFENDIDO

Nelly MONTEALEGRE DÍAZ*

SUMARIO: Introducción; **I.** Pautas para interpretar el principio de igualdad procesal para víctimas u ofendidos; **II.** Estándar y directrices para garantizar todos los derechos de la víctima u ofendido en el *Código Nacional de Procedimientos Penales*; **III.** La reparación del daño como derecho humano dentro del procedimiento penal mexicano; **IV.** Medidas de protección y providencias precautorias. El nuevo enfoque tutelar a favor de la víctima u ofendido; Conclusiones; Fuentes consultadas.

Introducción

Si bien el Sistema de Justicia Penal, busca esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, que se repare el daño, y así contribuir a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, con plena observancia a los derechos humanos¹, su cumplimiento y legitimación en gran medida depende del equilibrio procesal que logre y es en ese esquema en el que la víctima y/o el ofendido colocan al sistema ante grandes desafíos normativos, operacionales y de funcionamiento.

Es innegable que la reformas al sistema de justicia penal, en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* en materia de Seguridad y Justicia 2008, de Derechos Humanos 2011, de Amparo en 2011 y 2013, han incorporado esquemas de protección a los derechos humanos de las víctimas u ofendidos del delito, sin embargo, la norma por sí sola no transforma nada, es el actuar institucional y de los operadores del sistema de justicia penal lo que hace que las normas cobren vida y ese es el punto en el que se aprecia una realidad inacabada.

* Licenciatura en *Derecho* por la Universidad Tecnológica de México; Maestría en *Administración Militar para la Seguridad Interior y la Defensa Nacional* en el Colegio de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, Maestría en *Administración de Justicia* por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), con especialidad en *Sistema Acusatorio* por la Escuela Libre de Derecho. A lo largo de más de 19 años de experiencia profesional se ha desempeñado en diversos cargos públicos en México, principalmente en los ámbitos de procuración de justicia, seguridad pública, protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y derechos humanos. Actualmente se desempeña como consultora independiente.

¹ **Artículo 2** del *Código Nacional de Procedimientos Penales*.

A fin de aportar al gran desafío, el objetivo principal de este trabajo está dirigido a identificar pautas para interpretar algunos de sus principios, estándares y directrices para garantizar los derechos las víctimas ofendidos, entre ellos, la reparación del daño y, por último, nos vamos a referir a las medidas de protección y providencias precautorias.

I. Pautas para interpretar el principio de igualdad procesal para víctimas u ofendidos

Entre los principios del proceso penal se encuentra el principio de igualdad entre las partes, bajo la premisa de que la víctima u ofendido, el imputado, el defensor y el Ministerio Público gozan de las mismas prerrogativas y oportunidades, es decir, se les debe conceder igualdad de condiciones para que ninguno quede en estado de indefensión o desprotección.

Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 10 Principio de igualdad ante la Ley y 11 Principio de igualdad entre las partes del *Código Nacional de Procedimientos Penales*, existen autores que sostienen que el principio de igualdad en el ámbito del proceso es una manifestación del principio de igualdad ante la ley². Lo anterior, permite la intervención directa y activa de la víctima para garantizar sus

derechos a la verdad, a la justicia y la reparación del daño.

«Es innegable que la reformas al sistema de justicia penal, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad y Justicia 2008, de Derechos Humanos 2011, de Amparo en 2011 y 2013, han incorporado esquemas de protección a los derechos humanos de las víctimas u ofendidos del delito, sin embargo, la norma por sí sola no transforma nada, es el actuar institucional y de los operadores del sistema de justicia penal lo que hace que las normas cobren vida y ese es el punto en el que se aprecia una realidad inacabada».

² LOUTAYF RANEA, Roberto y SOLÁ, Ernesto, *Principio de Igualdad Procesal en materia Probatoria*, s/d, p. 3.

Consagrado en el artículo 20 fracción V, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, dicho principio conforma uno de los pilares del sistema y a su vez, establece el marco de respeto a los derechos humanos de las partes.

Entre los criterios orientadores para interpretar el principio de igualdad procesal, se encuentra la reciente tesis aislada emitida el Décimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito de rubro: «IGUALDAD PROCESAL EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. ATENTO A ESTE PRINCIPIO, UNA VEZ QUE EL IMPUTADO SE ENCUENTRE DETENIDO, SEA OBJETO DE UN ACTO DE MOLESTIA O CITADO A ENTREVISTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, TIENE DERECHO AL ACCESO A LOS REGISTROS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO A OBTENER COPIAS DE ÉSTOS, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE EXCEPCIÓN QUE LA CONSTITUCIÓN O LA LEY ESTABLECEN»,³ en el que establece que el principio de igualdad, tuvo como

objetivo privilegiar que exista entre el imputado y la parte acusadora constituida por la víctima y el Ministerio Público.

Asimismo, señala como fundamento del principio que nos ocupa el artículo 20, apartados A, fracción V, B, fracciones III, IV, VI, y C, fracciones I y II, de la Constitución Federal y el artículo 10 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*.

De conformidad con la referida tesis, no considera el principio de igualdad entre las partes del artículo 11 del CNPP como parte del principio de igualdad procesal.

Ahora bien, no podemos dejar de mencionar su relación intrínseca con el principio de contradicción, con el que se busca que los sujetos en el proceso cuenten con los medios necesarios para articular un proceso dialéctico de valoración de la prueba y a partir de la presentación de pruebas y argumentos de manera equilibrada conocer la verdad de los hechos⁴.

³ Tesis I.10o.P.30 P (10a.), de la Décima Época, sostenida por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2381, Libro 59, octubre de 2018, Tomo III, del SJF y su Gaceta, el número de registro 2018160, bajo el rubro: «IGUALDAD PROCESAL EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. ATENTO A ESTE PRINCIPIO, UNA VEZ QUE EL IMPUTADO SE ENCUENTRE DETENIDO, SEA OBJETO DE UN ACTO DE MOLESTIA O CITADO A ENTREVISTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, TIENE DERECHO AL ACCESO A LOS

REGISTROS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO A OBTENER COPIAS DE ÉSTOS, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE EXCEPCIÓN QUE LA CONSTITUCIÓN O LA LEY ESTABLECEN».

⁴ SANTACRUZ LIMA, Rafael, «El principio de igualdad entre las partes en el proceso penal en México», *Revista Ciencia Jurídica*, Año 6, No. 11, junio 2017, p. 139. Disponible en: <http://www.cienciajuridica.ugto.mx/inde>

El control convencionalidad que en palabras del Doctor Claudio NASH es la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas con la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia⁵. Afirmación a la que podemos adicionar que, el control de convencionalidad comprende tanto la garantía del sistema interamericano como del sistema universal de los derechos humanos, por ello se debe atender en principio a lo que disponen los siguientes instrumentos:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos;
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, y

- Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Bajo esa tesitura, no es factible pasar por alto el contenido de la *Observación general número 32* del Comité de Derechos Humanos denominada *El derecho a un juicio imparcial y la igualdad ante los Tribunales y cortes de justicia*⁶, relativa a la interpretación del artículo 14 del supra referido Pacto Internacional, que preserva la garantía de igualdad de medios procesales y asegura que las partes sean tratadas sin discriminación alguna, así mismo, establece derechos y obligaciones en un procedimiento judicial.

Dicho principio incorpora la asistencia letrada para tener acceso a las actuaciones judiciales, participar en ellas de modo válido y con igualdad de medios procesales con la excepción

[x.php/CJ/article/view/226](http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad8.pdf)], consultada en: 2018-10-19.

⁵ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, No. 7 Control de Convencionalidad*, Costa Rica 2017, p. 3, disponible en: [\[http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad8.pdf\]](http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad8.pdf), consultada en: 201-10- 18.

⁶ OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Observación general número 32 El derecho a un juicio imparcial y la igualdad ante los Tribunales y Cortes de Justicia*, disponible en:

[\[https://www.google.com.mx/search?q=OFICINA+DEL+ALTO+COMISIONADO+PARA+LOS+DERECHOS+HUMANOS%2C+Observaci%C3%B3n+general+n%C3%BAmero+32+El+derecho+a+un+juicio+imparcial+y+la+igualdad+ante+los+Tribunales+y+Cortes+de+Justicia&rlz=1C1GCEU_esMX819MX820&oq=OFICINA+DEL+ALTO+COMISIONADO+PARA+LOS+DERECHOS+HUMANOS%2C+Observaci%C3%B3n+general+n%C3%BAmero+32+El+derecho+a+un+juicio+imparcial+y+la+igualdad+ante+los+Tribunales+y+Cortes+de+Justicia&aqs=chrome69i57.4559j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8\]](https://www.google.com.mx/search?q=OFICINA+DEL+ALTO+COMISIONADO+PARA+LOS+DERECHOS+HUMANOS%2C+Observaci%C3%B3n+general+n%C3%BAmero+32+El+derecho+a+un+juicio+imparcial+y+la+igualdad+ante+los+Tribunales+y+Cortes+de+Justicia&rlz=1C1GCEU_esMX819MX820&oq=OFICINA+DEL+ALTO+COMISIONADO+PARA+LOS+DERECHOS+HUMANOS%2C+Observaci%C3%B3n+general+n%C3%BAmero+32+El+derecho+a+un+juicio+imparcial+y+la+igualdad+ante+los+Tribunales+y+Cortes+de+Justicia&aqs=chrome69i57.4559j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8), consultada en: 2018-10-17.

de aquellas distinciones justificadas por causas objetivas y razonables.

II. Estándar y directrices para garantizar todos los derechos de la víctima u ofendido en el Código Nacional de Procedimientos Penales

Para hablar de estándares de protección a las víctimas resulta necesario señalarlos contenidos en instrumentos internacionales, entre los más importantes en la materia, están:

- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)⁷;
- Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las

⁷ En virtud de la interpretación que de sus principios realizan la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos podemos señalar que en el Sistema Interamericano los principios contenidos en esa Convención dan origen a los estándares mínimos de protección a los Derechos Humanos.

⁸ NACIONES UNIDAS, *Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder*, Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, disponible en: [\[https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx\]](https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx), consultada en: 2018-10-30.

⁹ NACIONES UNIDAS, *Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación, CEDAW*, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, disponible en: [\http://www2.unwomen.org/

Víctimas de Delitos y Abuso de Poder(1985)⁸;

- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación CEDAW (1979)⁹;
- Convención sobre los derechos del Niño (1989)¹⁰;
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada¹¹ y sus protocolos;
- Principios Básicos para la Aplicación de Programas de Justicia Restaurativa en Materia Penal (2002)¹², y
- Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas en las Normas Internacionales de Derechos

[/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convención%20pdf.pdf?la=es\]](#), consultada en: 2018-10-30.

¹⁰ NACIONES UNIDAS, *Convención sobre los derechos del Niño*, disponible en: [\[https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx\]](https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx), consultada en: 2018-10-30.

¹¹ NACIONES UNIDAS, *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada*, disponible en: [\[https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf\]](https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf), consultada en: 2018-10-30.

¹² NACIONES UNIDAS, *Principios Básicos para la Aplicación de Programas de Justicia Restaurativa en Materia Penal*, disponible en: [\[https://www.unodc.org/pdf/crime/commissions/11comm/5add1s.pdf\]](https://www.unodc.org/pdf/crime/commissions/11comm/5add1s.pdf), consultada en: 2018-10-30.

Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones (2005)¹³.

«... podemos señalar que los estándares de protección en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no se limitan a la intervención de la víctima de acuerdo con la enunciación que de ella se haga en alguno de sus numerales, ya que más bien se encuentran en el proceso en general, ello si consideramos que la razón de ser los estándares es proveer de seguridad jurídica a las víctimas».

Si bien en cada uno de éstos instrumentos se alude a temáticas particulares, en su análisis e interpretación no puede obviarse el espíritu que entraña cada uno de ellos, el contexto y los antecedentes históricos de su gestación.

Especial énfasis ocupa la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, que en palabras de la Doctora LIMA MALVIDO, es el estándar internacional generalizado del tema como un marco consensado de normas y reglas mínimas, que garantizan y clarifican el contenido de los derechos fundamentales de las víctimas de delitos¹⁴.

Por lo anterior, podemos señalar que los estándares de protección en el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, no se limitan a la intervención de la víctima de acuerdo con la enunciación que de ella se haga en alguno de sus numerales, ya que más bien se encuentran en el proceso en general, ello si consideramos que la razón de ser los estándares es proveer de seguridad jurídica a las víctimas.

Es decir, al referirnos a estándares y directrices contenidos en

¹³ NACIONES UNIDAS, *Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas en las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones*, disponible

en:
[\[https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/remedyandrepairation.aspx\]](https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/remedyandrepairation.aspx), consultada en: 2018-10-30.

¹⁴ LIMA MALVIDO, María, *Políticas Públicas en la Atención a Víctimas*, INACIPE, México, 2015, pp. 64-65.

el referido código procesal, se debe dar por hecho que en su aplicación el operador del sistema de justicia, incorpora en su análisis instrumentos complementarios de derecho internacional y nacional que complementan su interpretación, pero sobre todo que determinan su actuar.

En relación con el *Código Nacional de Procedimientos Penales* los estándares de protección surgen de los principios y derechos que establece ese cuerpo normativo, como el de contradicción, continuidad, concentración, intermediación, igualdad ante la ley y por supuesto el ya señalado principio de igualdad entre las partes, como derechos del procedimiento los concernientes a la intimidad y la privacidad, de justicia pronta, a la defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata y a ser informado de sus derechos, sin pasar por alto que en diversos numerales se atiende a los estándares para garantizar los derechos de las víctimas.

¹⁵ Siguiendo a la Doctora LIMA MALVIDO, el *Código Nacional de Procedimientos Penales* y la *Ley General de Víctimas* constituyen el “Estándar General” y las leyes generales que se citan enseguida son los “Estándares Especializados”. *Ibidem.*, p. 85.

¹⁶ Está ley entraña en sí misma, un conjunto de estándares y directrices para garantizar los derechos de la víctima u ofendido. Específicamente en el caso de los funcionarios de Organismos Públicos de Protección de Derechos Humanos, determina el deber de recomendar las

Por último, en el segmento de estándares y directrices para garantizar los derechos de la víctima u ofendidos como parte en el proceso penal, además del referido Código Procesal ¹⁵, no podemos dejar de señalar ni aplicar de acuerdo al caso concreto los que establecen entre otras:

- La *Ley General de Víctimas*¹⁶;
- La *Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos*;
- La *Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro*; y
- La *Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas*¹⁷.

reparaciones a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos con base en los estándares y elementos establecidos en esa Ley; y para el caso de las Policías el respetar las mejores prácticas y los estándares mínimos del derecho internacional de los derechos humanos.

¹⁷ Al respecto, el artículo 173 establece que para el acompañamiento de las víctimas de los delitos a que se refiere esa Ley, determina que la capacitación que deben recibir los servidores públicos sea conforme a los estándares

«En relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales los estándares de protección surgen de los principios y derechos que establece ese cuerpo normativo, como el de contradicción, continuidad, concentración, inmediatez, igualdad ante la ley y por supuesto el ya señalado principio de igualdad entre las partes, como derechos del procedimiento los concernientes a la intimidad y la privacidad, de justicia pronta, a la defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata y a ser informado de sus derechos, sin pasar por alto que en diversos numerales se atiende a los estándares para garantizar los derechos de las víctimas».

Cada una de ellas, establece acciones particulares y específicas de acuerdo al tipo de víctima sujeta de protección, para garantizar los aspirados estándares y directrices.

Ante la relevancia que guardan los estándares en la garantía de derechos humanos para víctimas y ofendidos, resulta pertinente citar la metodología que propone la Doctora LIMA MALVIDO, para la ubicación de estándares, la cual tiene como finalidad que el operador sea consciente de que el análisis y la elección de los aplicables al caso concreto. Bajo esa tesitura, ofrece la siguiente tipología de estándares: de contexto, victimológico, delictual, de impacto, de competencia, de alcance, de participación¹⁸.

III. La reparación del daño como derecho humano dentro del procedimiento penal mexicano

La reparación del daño es quizá uno de los temas de mayor trascendencia para las víctimas en el Sistema de Justicia Penal y como lo señala RODRÍGUEZ MANZANERA «La necesidad de la reparación del daño es un tema en que todos los autores de todas las escuelas están de acuerdo»¹⁹.

Evidencia de lo anterior, lo constituye la referida Declaración sobre los Principios Fundamentales de

internacionales para brindar ayuda, asistencia y atención a las víctimas de los delitos a que se refiere esa Ley.

¹⁸ LIMA MALVIDO, *Ibidem.*, pp. 86-92.

¹⁹ RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis, *Victimología*, Porrúa, México 1998, p.339.

Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder que en sus artículos 4 y 5 que establecen:

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.

Como se observa, el espíritu de ambos numerales, se incorporó en el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, en el que la reparación del daño es una figura que se privilegia en cada una de las etapas del procedimiento penal, ya sea en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias²⁰, en alguna de las soluciones alternas, en ambos casos a través del acuerdo reparatorio²¹; y en el procedimiento abreviado.

²⁰ El artículo 29 de esa Ley, establece los conceptos que pueden incorporar la reparación del daño derivada de la junta restaurativa.

«La reparación del daño es quizá uno de los temas de mayor trascendencia para las víctimas en el Sistema de Justicia Penal y como lo señala Rodríguez Manzanera “La necesidad de la reparación del daño es un tema en que todos los autores de todas las escuelas están de acuerdo”».

En el caso de que se llegue a etapa de juicio y en el supuesto de que se obtenga una sentencia condenatoria, el citado cuerpo normativo establece que será en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño cuando se emitirá el pronunciamiento sobre la forma en que deberá repararse el daño.

Lo anterior sin dejar de considerar que es un derecho que, a lo largo del proceso, puede estar garantizado por alguna de las

²¹ En el caso de la suspensión condicional del proceso el imputado debe plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo.

providencias precautorias que establece el artículo 138 del supra citado ordenamiento, lo relevante sería conocer en cuántos casos se han solicitado y otorgado esas providencias.

«... ante la posibilidad de una nueva vulneración a la seguridad de la víctima u ofendido, resulta necesaria la intervención del Estado para su protección, actividad que desde una perspectiva integral conlleva el reconocimiento del derecho a medidas de protección, que tienen por objeto garantizar entre otros la vida e integridad de una persona en virtud de relación con los procedimientos judiciales, en contra de actos de coerción, amenaza, intimidación y hostigamiento».

Por otro lado, el ejercicio de ese derecho es uno de los casos que el citado ordenamiento establece como supuestos para que la víctima u ofendido puedan impugnar las resoluciones que versen sobre la reparación del daño²².

Ahora bien, en el Derecho Internacional la reparación del daño ha sido reconocida como un principio general del derecho, conforme al cual diversos instrumentos internacionales de derechos humanos contienen normas precisas acerca de la obligación de los Estados, de reparar violaciones a los derechos humanos²³. Entre ellas la Convención Americana sobre Derechos Humanos²⁴.

IV. Medidas de protección y providencias precautorias. El nuevo enfoque tutelar a favor de la víctima u ofendido

La respuesta integral que deriva del reconocimiento de los derechos de la víctima por parte del Estado incorpora como parte de sus objetivos garantizar entre otros la vida, la integridad, la seguridad y en general su bienestar.

²² **Artículo 459** del *Código Nacional de Procedimientos Penales*.

²³ MEDELLÍN, Ximena, *Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre derechos de las víctimas*, Fundación para el Debido Proceso, Washington 2014, p. 116 y 117.

²⁴ **Artículo 63. 1** de la *Convención Americana sobre Derechos Humanos*. - Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta

Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Es decir, ante la posibilidad de una nueva vulneración a la seguridad de la víctima u ofendido, resulta necesaria la intervención del Estado para su protección, actividad que desde una perspectiva integral conlleva el reconocimiento del derecho a medidas de protección, que tienen por objeto garantizar entre otros la vida e integridad de una persona en virtud de relación con los procedimientos judiciales, en contra de actos de coerción, amenaza, intimidación y hostigamiento²⁵.

Frente a la necesidad de mejorar los niveles de protección y apoyo a las víctimas de los delitos, específicamente de aquellas que derivan de la naturaleza del hecho victimizante. Por citar algunos de los instrumentos que se ocupan de proteger el Derecho a la Protección se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos²⁶, en el sistema interamericano la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 63 expresa:

Artículo 63

...

²⁵ MEDELLÍN, Ximena, *op. cit.*, p. 31-32.

²⁶ En su artículo 3 establece que «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona».

²⁷ El objetivo de la carta es instrumentalizar y desarrollar las Cien Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia, en materia de víctimas en general y de

En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.

Ambos instrumentos entrañan no solo el derecho de las víctimas a recibir protección, sino también el correspondiente deber del Estado de proveer las medidas necesarias para la protección de las víctimas.

Por su parte, la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas²⁷, adoptada en la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana de la que México forma parte, expresa en su artículo 8:

Artículo 8. Derecho a la Protección

El efectivo reconocimiento y respeto de los derechos de las víctimas, específicamente su integridad física, dignidad, propiedad, vida privada y familia deben protegerse al mismo tiempo que se garantizan los derechos

delito en particular. Secretaría Permanente, CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA, *Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas*, disponible en: [<http://www.cumbrejudicial.org/productos-y-resultados/productos-axiologicos/item/37-carta-iberoamericana-de-derechos-de-las-victimas>], consultado en: 2018-11-01.

fundamentales de otras partes intervinientes.

Las administraciones de justicia deben garantizar los mecanismos efectivos para que la víctima se protegida de toda nueva víctima hizo siempre venir del autor del ilícito o de terceras personas que actúan en común acuerdo con éste. La víctima tiene derecho a no ser objeto de nuevas agresiones, intimidaciones por amenazas durante las etapas del proceso judicial.

8.1 Derecho de Protección

La víctima tiene derecho estar libre de intimidación, acoso y abuso durante todo el proceso judicial. Los sistemas de administración de justicia velarán por el cumplimiento efectivo de estos derechos, adoptando las medidas necesarias cuando la persona vea amenazada su integridad física, misma que puede variar según la etapa del proceso que se encuentra.

De ser necesaria la medida de protección incluirá a la familia inmediata buenas personas que están a cargo de la víctima directa cuando estés en objeto de la amenaza.

La causa donde existen personas sometidas a los programas de protección deberán ser tramitadas y resueltas en forma expedita te modo que se pueda minimizar el

riesgo que se encuentran las personas protegidas.

Sin duda, la Carta en comento, guarda compatibilidad con los estándares de los instrumentos de derechos humanos de protección a las víctimas del delito, tanto del Sistema Universal como del Sistema Interamericano, además contribuye a la evolución en la interpretación de esos instrumentos.

Por su parte el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, establece entre los derechos de la víctima el de solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares.

Las medidas de protección son determinadas para aquellos casos en los que el Ministerio Público, considera que el imputado representa un riesgo a la seguridad de la víctima. Algunas como la separación del domicilio, requieren de control judicial, a fin de que el órgano jurisdiccional determine su cancelación, ratificación o modificación²⁸.

Por su parte las providencias precautorias, se determinan para garantizar la reparación del daño, la cuales requieren de control judicial, consisten en el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y valores del sistema financiero; y se tramitan a

²⁸ **Artículo 137**, *Código Nacional de Procedimientos Penales*.

petición de la víctima, el ofendido o el Ministerio Público²⁹.

Sin embargo, el mayor riesgo que se corre es de la subjetividad, cuáles son los elementos de ponderación en la valoración del Ministerio Público para la determinación de las medidas de protección, qué datos aporta al Juez para su determinación. Al respecto, la función del Asesor Jurídico es primordial, en la que su actuar encamine la objetividad en el respeto a los derechos de la víctima.

Por lo anterior, viene a cuenta citar el Protocolo de la Asesoría Jurídica Federal, que establece las atribuciones del Asesor Jurídico Federal para garantizar el derecho a la protección de víctimas u ofendidos en cada una de las etapas del procedimiento³⁰.

Si bien las medidas de protección y las providencias precautorias, tienen diversas finalidades, también lo es que entrañan objetivos comunes, por supuesto, el más importante es la protección de la víctima u ofendido, pero también se traducen en la confiabilidad en el Sistema de Administración y Procuración de

Justicia, que ante el hecho victimizante da una respuesta integral, eficaz y de protección.

Por lo anterior, su determinación debe ceñirse a lo dispuesto en el referido Código, pero confeccionarse en su análisis e interpretación bajo la perspectiva de integralidad de los derechos humanos, que permitan la protección más amplia a la que la víctima tiene derecho.

«Como quedó establecido, existe una vasta protección normativa para víctimas y ofendidos como sujetos y parte en el proceso penal, no obstante, sin dejar de reconocer los avances en su protección, asistencia y atención; tenemos que ser sinceros, ni las instituciones, ni los operadores, ni la normativa han estado a la altura de la integralidad de su cumplimiento».

²⁹ **Artículo 138**, *Código Nacional de Procedimientos Penales*.

³⁰ Dicho Protocolo establece los formatos y procedimientos para la intervención del Asesor Jurídico Federal, que comprenden desde la solicitud y seguimiento de las medidas cautelares y providencias precautorias, en la etapa de investigación y control de detención. Además, la solicitud y seguimiento en la

investigación complementaria, su intervención en la vinculación a proceso para la determinación judicial de las medidas cautelares. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, *Protocolo de la Asesoría Jurídica Federal*, México 2015, pp. 15-21, disponible en: [<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127945/ProtocoloAJFedpdf>], consultada en: 2018-11-01.

Conclusiones

Como quedó establecido, existe una vasta protección normativa para víctimas y ofendidos como sujetos y parte en el proceso penal, no obstante, sin dejar de reconocer los avances en su protección, asistencia y atención; tenemos que ser sinceros, ni las instituciones, ni los operadores, ni la normativa han estado a la altura de la integralidad de su cumplimiento.

Ahora, el desafío se muestra en la operacionalización del cuerpo normativo nacional e internacional que entrañan por un lado un espíritu integral de protección y por otro se preconiza un esquema procesal adversarial, basado en sistema de garantías y equilibrio entre quien acusa y quien se defiende de la acusación.

Ante tales condiciones, resulta indispensable allegarse de los conocimientos, instrumentos y reglas de interpretación que conduzcan a un claro y objetivo posicionamiento, en el que se logre la vinculación de los estándares y su aplicación en casos concretos.

El reconocimiento efectivo de los derechos de la víctima guarda una relación directa con la confiabilidad en el sistema, es por ello que en el diseño y operación de los esquemas de atención y protección a víctimas deben considerarse los beneficios de su buen funcionamiento, observando como referencia la disminución de los efectos negativos y costos generados por la delincuencia.

El funcionamiento del sistema de justicia no debe contribuir a agravar la condición de la víctima o ponerla en riesgo, no debe revictimizarla, por el contrario, debe encontrar en el esquema de administración y procuración de justicia la respuesta idónea para que le sea resarcido el daño y la protección más alta a sus intereses.

«Ahora, el desafío se muestra en la operacionalización del cuerpo normativo nacional e internacional que entrañan por un lado un espíritu integral de protección y por otro se preconiza un esquema procesal adversarial, basado en sistema de garantías y equilibrio entre quien acusa y quien se defiende de la acusación».

Fuentes consultadas

Bibliografía

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, *Protocolo de la Asesoría Jurídica Federal*, México 2015, pp. 15-21, disponible en: [<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127945/ProtocoloAJFedpdf>], consultada en: 2018-11-01.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, No. 7 Control de Convencionalidad*, Costa Rica 2017, p. 3, disponible en: [<http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad8.pdf>], consultado en: 201-10- 18.

CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA, *Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas*, disponible en: [<http://www.cumbrejudicial.org/productos-y-resultados/productos-axiologicos/item/37-carta-iberoamericana-de-derechos-de-las-victimas>], consultada en: 2018-11-01.

LIMA MALVIDO, María, *Políticas Públicas en la Atención a Víctimas*, INACIPE, México, 2015.

LOUTAYF RANEA, Roberto y SOLÁ, Ernesto, *Principio de Igualdad Procesal en materia Probatoria*, s/d.

MEDELLÍN, Ximena, *Digesto de jurisprudencia latinoamericana*

sobre derechos de la víctima, Fundación para el Debido Proceso, Washington 2014.

NACIONES UNIDAS, *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada*, disponible en: [<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>], consultada en: 2018-10-30.

_____, *Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación*, CEDAW, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, disponible en: [<http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convención%20pdf.pdf?la=es>], consultada en: 2018-10-30.

_____, *Convención sobre los derechos del Niño*, disponible en: [<https://www.ohchr.org/sp/profesionalinterest/pages/crc.aspx>], consultada en: 2018-10-30.

_____, *Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder*, Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, disponible en: [<https://www.ohchr.org/sp/profesionalinterest/pages/victimsofcr>]

[imeandabuseofpower.aspx](#)],

consultada en: 2018-10-30.

_____, *Principios Básicos para la Aplicación de Programas de Justicia Restaurativa en Materia Penal*, disponible en: [\[https://www.unodc.org/pdf/crime/commissions/11comm/5add1s.pdf\]](https://www.unodc.org/pdf/crime/commissions/11comm/5add1s.pdf), consultada en: 2018-10-30.

_____, NACIONES UNIDAS, *Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas en las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones*, disponible en:

[\[https://www.ohchr.org/sp/profesionalinterest/pages/remedyandrepairation.aspx\]](https://www.ohchr.org/sp/profesionalinterest/pages/remedyandrepairation.aspx), consultada en: 2018-10-30.

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Observación general número 32 El derecho a un juicio imparcial y la igualdad ante los Tribunales y Cortes de Justicia*, disponible en: [\https://www.google.com.mx/search?q=OFICINA+DEL+ALTO+COMISIONADO+PARA+LOS+DERECHOS+HUMANOS%2C+Observaci%C3%B3n+general+n%C3%BAmero+32+El+derecho+a+un+juicio+imparcial+y+la+igualdad+ante+los+Tribunales+y+Cortes+de+Justicia&rlz=1C1GCEU_e_sMX819MX820&oq=OFICINA+DEL+ALTO+COMISIONADO+P

[ARA+LOS+DERECHOS+HUMANOS%2C+Observaci%C3%B3n+general+n%C3%BAmero+32+El+derecho+a+un+juicio+imparcial+y+la+igualdad+ante+los+Tribunales+y+Cortes+de+Justicia&aqs=c_hrome69i57.4559j0j4&sourceid=c_hrome&ie=UTF-8](#)], consultada en: 2018-10-17.

RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis, *Victimología*, Porrúa, México 1998.

SANTACRUZ LIMA, Rafael, «El principio de igualdad entre las partes en el proceso penal en México», *Revista Ciencia Jurídica*, Año 6, No. 11, junio 2017, p. 139. Disponible en: [\[http://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/view/226\]](http://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/view/226), consultado en: 2018-10-19.

Legislación Nacional

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tesis I.10o.P.30 P (10a.), de la Décima Época, sostenida por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2381, Libro 59, octubre de 2018, Tomo III, del SJF y su Gaceta, el número de registro 2018160, bajo el rubro: «IGUALDAD PROCESAL EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. ATENTO A ESTE PRINCIPIO, UNA VEZ QUE EL IMPUTADO SE ENCUENTRE DETENIDO, SEA OBJETO DE UN ACTO DE MOLESTIA O CITADO A ENTREVISTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, TIENE DERECHO AL

AÑO VII • NÚMERO 25 • NOVIEMBRE 2018

ACCESO A LOS REGISTROS DE LA
CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASÍ
COMO A OBTENER COPIAS DE ÉSTOS,
SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN
ALGUNO DE LOS CASOS DE
EXCEPCIÓN QUE LA CONSTITUCIÓN
O LA LEY ESTABLECEN».

Código Nacional de Procedimientos
Penales.

Ley General de Atención a Víctimas.

Ley Nacional de Mecanismos
Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal.